

Respuestas organizativas de la sociedad

A lo largo de este período la sociedad venezolana continuó siendo testigo y protagonista de una intensa lucha hegemónica en función de definir e implementar el proyecto político que guiará el futuro nacional. Desde el inicio del gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías, la movilización, participación y organización de los más diversos sectores sociales ha sido intensa, alcanzándose en este período el número más elevado de movilizaciones. Una revisión del número de acciones de protesta ocurridas durante el gobierno de Chávez nos da la siguiente evolución: en el período 1998-1999 fue de 855¹, en el período siguiente, 1999-2000, ascendieron a 1.414²; para el período 2000-2001 hubo una ligera disminución al registrarse 1.312 protestas³ y en el período pasado, 2001-2002, volvió a registrarse una ligera disminución para llegar a 1.262⁴. Para el actual período el número de manifestaciones registradas llegó a su pico máximo con un total de 1.543⁵.

El hito más relevante de estas acciones colectivas de protesta fue el paro general iniciado el 02.12.02, que fue llamado por su convocante, la Coordinadora Democrática (CD), “Paro Cívico Nacional”. Una cadena de

1. Provea: Informe anual octubre 1998 – septiembre 1999. Caracas, 1999. Pág.321.
2. Provea: Informe anual octubre 1999 – septiembre 2000. Caracas, 2000. Pág.333.
3. Provea: Informe anual octubre 2000 – septiembre 2001. Caracas, 2001. Pág.405.
4. Provea: Informe anual octubre 2001 – septiembre 2002. Caracas, 2002. Pág.495.
5. Base de datos de Provea.

acontecimientos previos creó las condiciones para convertir a este cuarto paro del movimiento de oposición durante el actual gobierno -junto con el golpe de Estado de abril de 2002- en una de las acciones colectivas más dramáticas vividas en años recientes por la sociedad venezolana.

Desde el inicio mismo del período correspondiente a este Informe, la política de la calle fue intensificándose día a día. Algunos hechos ocurridos con anterioridad explican el proceso. Mes y medio antes, el 14.08.02, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un dictamen según el cual no existían méritos para enjuiciar a cuatro oficiales comprometidos con el Golpe de Estado del 11.04.02. Ese mismo día, Provea hizo un pronunciamiento público señalando los mecanismos de impunidad que ya estaban operando en el juicio, al tiempo que señalaba que *“Sostener que en Venezuela no hubo un Golpe de Estado [...] es avalar la perpetración de futuros Golpes de Estado, en tanto que el modo como se construye un discurso sobre lo que ocurrió en el pasado, incide en la construcción del futuro. La tesis del ‘vacío de poder’ es cómplice de una vocación autoritaria y no puede ser aceptada por nadie que se precie de democrata”*⁶. En efecto, con su sentencia de agosto, el TSJ alentó acciones insurreccionales, contribuyendo a intensificar el clima de confrontación y violencia política que comenzó a crecer en octubre de 2002. El mismo 01.10.02, agentes de la Policía Metropolitana (PM) de Caracas iniciaron una paralización de actividades⁷, acción que a lo largo de todo el año sería centro de conflictos entre el Ejecutivo Nacional y la Alcaldía Mayor de Caracas. El 10.10.02 se realizó una concurrida marcha de la oposición

que, aunque estuvo precedida de múltiples e inquietantes rumores, transcurrió de manera pacífica. El 13.10.02 las fuerzas que apoyan al Gobierno realizaron una igualmente concurrida marcha. El 21.10.02 se llevó a cabo, durante 12 horas, el tercer “paro cívico” en contra del gobierno de Hugo Chávez, que voceros de la oposición y del gobierno evaluarán contradictoriamente. Estos acontecimientos transcurrieron sin violencia, y en horas de la tarde del día siguiente, 22.10.02, catorce oficiales militares activos comprometidos con el Golpe de Estado de abril, tomaron la Plaza Francia de Altamira (Caracas), proclamándola *“territorio liberado”*, se declararon en *“desobediencia legítima”* e hicieron llamados reiterados a los adversarios del presidente Chávez a rebelarse y a desconocer el gobierno. En el transcurso de los dos meses siguientes se sumaron unos 100 oficiales más de distintos rangos, tanto activos como retirados. Esta situación de tipo insurreccional contó con el apoyo de diversos sectores de la sociedad y continúa a la fecha de cierre de este Informe. Sin embargo, si bien la toma de la plaza no concluyó formalmente, terminó minimizándose por desgaste y perdió notoriedad. Otros dos acontecimientos relevantes antecedieron al paro cívico nacional del 02.12.02. El 08.11.02, con la facilitación del Secretario General de la OEA, César Gaviria, se instaló la Mesa de Negociación y Acuerdos compuesta por representantes del Gobierno y de la oposición. Cuatro días después, el 12.11.02, grupos de oposición representados en la Mesa, contravinieron el espíritu de la misma, suscribieron en la plaza Francia de Altamira, con los oficiales insurrectos, un *“Pacto de Unidad”*. El 21 de ese mes, voceros de la CD anunciaron el nue-

6. Comunicado de Provea del 14.08.02.

7. El Nacional, 02.10.02, pág. D-Últ.

vo paro cívico que se iniciaría el 02.12.02 y culminaría dos meses después.

En ese contexto de aguda confrontación y polarización política, se evidenció una escalada en las acciones colectivas de naturaleza violenta⁸. Es de resaltar que en este período, comparándolo con el previo, se registró un incremento sustancial en el número de manifestaciones violentas. De 1.543 movilizaciones registradas, 300 fueron violentas, lo que en términos porcentuales significa un 19,4% del total⁹, significativo incremento en relación con el período anterior, cuando solo el 9,5% de las protestas fueron violentas¹⁰.

Contrasta también con el período previo la relevancia que en este tuvieron las movilizaciones motivadas por derechos civiles y políticos, equiparándose en número a las motivadas por derechos económicos, sociales o culturales, rompiéndose por primera vez la tendencia registrada en los 15 años de este Informe. En correspondencia con este comportamiento, los actores más activos del período fueron las organizaciones que forman parte del movimiento de oposición al Gobierno.

Además de la política de la calle, al igual que en el período anterior continuó profundizándose el proceso de surgimiento y consolidación de organizaciones sociales de muy variados tipos inspirados en la Constitución de 1999, que reconoce y estimula el derecho a desarrollar asociaciones de carácter social y participativo para la realización de cualquier tipo de actividad política, social o económica. Variadas expresiones organizativas de las comunidades se hacen cada vez más visibles, así como múltiples prácticas participativas, tales

como las asambleas de ciudadanos. Desde distintas instancias públicas, especialmente después de finalizado el paro petrolero, se impulsó la organización de cooperativas. Reactivada la actividad petrolera en el país y reestructurada Petróleos de Venezuela (PDVSA) de acuerdo con una política que procura fortalecer los lazos del sector petrolero con el resto de la sociedad, la industria ha venido incentivando y apoyando la participación de las comunidades organizadas como proveedoras de bienes y servicios. Además de la industria petrolera, otros entes y organismos públicos también han participado en iniciativas para el desarrollo de formas de economía social, lo que parece haberle dado en este período un especial florecimiento a esta forma asociativa.

La política de la calle y sus actores

A diferencia de los períodos anteriores, en los cuales fueron los estudiantes el sector de mayor movilización, en este fueron los opositores al Gobierno de Chávez fueron los más visibles en la política de calle. Del total de 1.543, los opositores fueron participantes de 326 movilizaciones, lo que representa poco más de un quinto (21,1%) del total de manifestaciones registradas durante el período. Ello, como ya señalamos, es un reflejo de la intensa confrontación y polarización política mencionada en párrafos anteriores.

Este actor participó en 15 manifestaciones violentas, lo que representa el 5% del total de las violentas. Es de destacar que la mayor parte de las manifestaciones protagonizadas por este actor tuvo lugar durante el primer semestre de este período, pues entre oc-

8. Al igual que en el Informe anterior, los saqueos y las retenciones temporales de bienes y personas se contabilizan como manifestaciones violentas.

9. Base de datos de Provea.

10. Provea: *Informe anual octubre 2001 – septiembre 2002*. Op. cit. Pág.349.

tubre de 2002 y marzo de 2003 se registraron 241 acciones de protesta del total de 326, lo que representa casi las tres cuartas partes del total de sus acciones¹¹.

Los estudiantes en sus tres niveles, primaria, secundaria y superior, para este período bajaron al segundo lugar. Fueron 208 las movilizaciones promovidas por estos actores, representando el 13,5% del total.

Si a los estudiantes se le suman los educadores y los padres y representantes, los actores sociales vinculados con el sector educativo participaron en 282 protestas, lo que representa el 18,3% de todas las movilizaciones registradas. Se registra una menor actividad de estos sectores en relación con el período anterior, cuando protagonizaron el 26,6% de las protestas de ese año¹². Lo que sí repiten estos actores es su preeminencia en la participación en manifestaciones violentas. De un total de 300 manifestaciones violentas registradas para este período, los estudiantes de secundaria y universitarios son partícipes de 96 (32%). Se registra, sin embargo, una disminución con respecto al período anterior, cuando participaron en 55% de las manifestaciones violentas¹³.

A los estudiantes le siguieron los vecinos como actor más activo en las acciones de protesta. Estos protagonizaron 183 protestas, lo que representa el 11,9% del total. Es de destacar que de estas, 8 fueron violentas, es decir, el 2,6% de todas las protestas violentas ocurridas en el período.

Los trabajadores asalariados, categoría en la cual incorporamos a todos los trabajadores del sector formal privado o público exceptuando a los educadores, profesionales de la salud y trabajadores y empleados petroleros, participaron en 163 acciones de protesta, que es el 10,6% de todas las registradas. La otra cara de la polarización política también estuvo activa en la política de la calle. Organizaciones y grupos que apoyan al Gobierno protagonizaron 139, es decir, el 9% de todas las registradas¹⁴. Con estos actores, al igual que lo señalado para la oposición, su mayor actividad se concentró en el primer semestre, cuando realizaron 73,4% de sus acciones de calle. Los partidos y organizaciones que apoyan al gobierno participaron en 30 protestas de naturaleza violenta, lo que representa un 10% de todas las acciones colectivas del período. Siguen luego en orden decreciente como protagonistas de la política de la calle: los desempleados con 91 acciones y los trabajadores de la salud con 90, el 5,9% y el 5,8% respectivamente. El conjunto de los actores hasta ahora mencionados escenificó el 77,8% de las manifestaciones reseñadas.

Otros actores de menor relevancia cuantitativa fueron los transportistas y chóferes, quienes participaron en 3,8% de las protestas; los reclusos y detenidos quienes participaron en 2,5% y los policías en 1,4%. Se registraron como acciones de pobladas el 1,2%, los trabajadores petroleros participaron en 1% y trabajadores despedidos de PDVSA

11. Base de datos de Provea.

12. Ver Provea: Op. cit. Pág.497.

13. Ídem.

14. Tal como ha venido ocurriendo desde el inicio de este gobierno, los medios de comunicación social, privados y públicos participan de la polarización política. Como lo señaláramos en el Informe del período anterior, esto puede estar introduciendo distorsiones en el registro numérico y la caracterización cualitativa de estas movilizaciones. Por ello los datos numéricos aquí presentados de movilizaciones de la oposición y del oficialismo pudieran no ser exactos.

en 0,6%. Otros actores, no agrupables en ninguna de las categorías anteriores como los buhoneros, usuarios de estaciones de gasolina durante el paro petrolero, familiares de reclusos y detenidos, jubilados y pensionados, periodistas, profesionales y empresarios, entre otros, protagonizaron las 107 acciones restantes, lo que representa el 6,9% de todas las acciones registradas.

La política de la calle y su repertorio

Como señalamos en el Informe del período previo, toda sociedad en cada momento histórico tiene un conjunto de formas de acción de protesta que caracteriza la manera en que sus distintos sectores se relacionan entre sí o intentan establecer diálogo con las autoridades públicas o privadas. Esto se conoce como el *repertorio* de una sociedad y es un buen reflejo de la calidad de las interrelaciones entre los diversos grupos e intereses y, principalmente, de estos con las distintas instancias de poder.

En el período correspondiente a este Informe, el cierre de calle -forma de acción de protesta más utilizada- es claramente una forma de acción colectiva confrontacional, entendiéndose por ello una modalidad de protesta que, siendo pacífica, tiene una alta capacidad disruptiva de la vida cotidiana y, por tanto, suele tener mucho poder de impacto y producir mucha turbulencia sociopolítica. Para este período se registraron 399 cierres de calle, lo que significa que una de cada cuatro movilizaciones registradas en el período fue en esta modalidad. De ese total, 28 terminaron en hechos de violencia, es decir el 7% de to-

dos los cierres de calle.

Al igual que en el período anterior, la segunda modalidad de movilización más usada en la política de la calle fue la concentración. A diferencia de la anterior, esta forma suele ser, además de pacífica, más convencional. Sin embargo, para este período, de las 323 concentraciones registradas, es decir, el 20,9% de la totalidad, 27 terminaron en violencia, lo que representa el 8,4% de las concentraciones. Adicionalmente, como ya se señaló en el capítulo Derecho a la Manifestación Pacífica¹⁵, 12 concentraciones fueron reprimidas y una impedida¹⁵. Estos rasgos evidencian un aumento de su impacto sociopolítico en este período.

Una expresión más del clima conflictivo del período que analizamos es que las manifestaciones violentas, como modalidad de protesta, se ubicaron en el tercer lugar de frecuencia. Como ya mencionamos, se registraron 300 acciones colectivas de este tipo, lo que representa 19,4% del total. Esto significó un incremento notable de las manifestaciones violentas en relación con el pasado, ya que en el período previo, por ejemplo, estas representaron el 9,5% y se ubicaban en el sexto lugar¹⁶. A esta modalidad le siguieron en frecuencia las marchas con 178 registradas, es decir, el 11,5%, luego las tomas de establecimientos -forma también muy confrontacional de protestar- con 128 acciones, lo que representó el 8,3% de todas las contabilizadas.

En este período la interrupción de actividades laborales con paros o huelgas descendieron a un sexto lugar con un total registrado de 104, el 6,7%. Siguen los cacerolazos con 67 (4,3%). La mayor parte de ellos, 45, fueron promovidas por la oposición. Cabe desta-

15. Para mayor información, ver capítulo Derecho a la Manifestación Pacífica en este mismo Informe.

16. Provea: Op. cit. Pág. 499.

car que 8 de esos cacerolazos fueron reseñados como violentos. Tal fue el cacerolazo sufrido por el Ministro de Defensa José Luis Prieto en la Plaza de Toros de Valencia el 11.11.02, o el realizado frente a la residencia del General (GN) Jesús Ramón Villegas Solarte en la California Sur el 04.12.02. El repertorio que venimos contabilizando continúa expresando, como ya señaláramos con respecto al Informe del período anterior, las poco institucionalizadas relaciones entre sociedad y poder. Durante este período se incrementó, además, el carácter hostil o violento entre los actores, y entre ellos y el Estado.

Menos usada fue la modalidad de las huelgas de hambre, que se utilizaron 43 veces, el 2,8% del total. Esta es otra forma claramente confrontacional a la que recurren actores desde posiciones de mucha debilidad y/o cuando su demanda tiene un alto contenido moral. Es el caso de los reclusos y detenidos, que protagonizaron 22 huelgas de hambre, o de los desempleados que protagonizaron 7. Otra forma, utilizada principalmente por actores de oposición, fue la caravana, registrándose para este período la realización de 32, el 2,1% de las cuales (23) fueron realizadas por este actor. Se registraron también 6 vigiliadas, 6 bloqueos de entradas y 4 paros cívicos. Adicionalmente se contabilizan 45 acciones colectivas que no se corresponden con ninguna de las modalidades señaladas. Entre estas, con cifras muy bajas, se encuentran modalidades como el encadenamiento, el robo de una estatua, la quema de un muñeco, etc.

La política de la calle y sus motivaciones

Una mirada global a las motivaciones de las protestas en este período pone de relieve que la exigibilidad de los derechos civiles y políticos (DCP), a diferencia de períodos previos, tanto en términos absolutos como porcentuales, se acerca mucho al número de protestas motivadas por la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales (DESC). De las 1.543 movilizaciones registradas, 703, el 45,6%, fueron motivadas por DCP y 755, el 48,9%, por DESC. El 5,5% restante corresponde a protestas cuya motivación no es claramente discernible. Comparando estos datos con los de años anteriores, puede apreciarse un incremento sustancial de las movilizaciones políticamente motivadas. En el período 2001-2002 se registraron 30,1% de acciones colectivas que respondían a este tipo de motivaciones¹⁷. Esto contrastó con los dos períodos previos, cuando las movilizaciones políticamente motivadas se ubicaron en 10,1%¹⁸. El equilibrio numérico entre las protestas motivadas por demandas socioeconómicas y las impulsadas por motivaciones civiles y políticas es un indicador de la turbulencia sociopolítica que vive nuestra sociedad y de la lucha hegemónica no resuelta. Solo encontramos una situación análoga en los años que van de 1958 a inicios de 1970, cuando una lucha hegemónica similar fue resuelta a favor de las fuerzas signatarias de los pactos de 1958 en adelante¹⁹.

17. Provea: Informe anual octubre 2001 – septiembre 2002. Op. cit. Pág. 500.

18. Provea: Informe anual octubre 1999 – septiembre 2000. Op. cit. Pág. 338; Informe anual octubre 2000 – septiembre 2001. Op. cit. Pág. 410.

19. Un análisis de la protesta en las décadas anteriores a los años recientes puede verse en LÓPEZ MAYA, Margarita y Luis E. LANDER: Novedades y continuidades de la protesta popular venezolana. Caracas. Mimeo.

Si observamos con más atención este comportamiento de las motivaciones de las acciones colectivas durante los diferentes trimestres del período, veremos que en los cuatro trimestres es posible detectar diferencias apreciables. Durante el primero se registraron 262 movilizaciones por DCP, bajando durante el segundo a 186, en el tercero a 138 y en el último a 117. El comportamiento de las movilizaciones por DESC es casi el opuesto. En el primer trimestre se registraron 126 movilizaciones por este tipo de demandas, en el siguiente aumentan a 160, en el tercer trimestre a 250 y en el cuarto terminan en 219. Así, es claro que las motivaciones de las protestas se han venido desplazando. Por otra parte, no puede desconocerse que en épocas de intensa lucha por la hegemonía política, movilizaciones que demandan explícitamente DESC pueden tener un trasfondo político determinante. Aún así, al registrarse para los dos primeros trimestres del período, especialmente el primero, una preeminencia plena de las movilizaciones por DCP, se pone en evidencia que hasta la culminación del paro de diciembre y enero la polarización y confrontación política vivida en la sociedad venezolana ocupaba el mayor espacio. Luego de finalizado el paro de diciembre y enero, sin que hubiese alcanzado los objetivos explícitos propuestos (“*salir de Chávez*”), la confrontación y polarización política -aunque no desaparecieron- bajaron de tono. En la explicación de este fenómeno intervienen múltiples y diversos factores. La recuperación de PDVSA y la puesta en marcha de la industria petrolera luego de su casi paralización total

puede ser reivindicadas por el Gobierno como un triunfo. Es evidente la fatiga de actores sociales opositores después de meses de intensa movilización sin alcanzar su principal objetivo. Errores en la conducción política de las principales fuerzas de oposición llevaron a sobrestimar las fuerzas propias y a subestimar las del adversario. Sin embargo, como se destaca en otros capítulos de este Informe, no ha sido la represión un factor determinante en la moderación del tono de la confrontación política a fines del período. Puede por el contrario constatarse, desde que Provea viene elaborando su Informe Anual, que es en este período cuando las manifestaciones pacíficas han sido menos reprimidas²⁰.

Exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales

Al igual que en períodos anteriores, las acciones colectivas de protesta motivadas por derechos laborales -sueldos, trabajo, discusión de nuevos contratos, respeto a contratos vigentes, despidos, etc.- son las predominantes. Las protestas motivadas por la exigencia de estos derechos alcanzaron las 381, que representa el 50,5% de todas las agrupadas en el rubro de los DESC y el 24,7% del total general²¹. Entre estos derechos, los que tienen que ver con salario en el sentido más amplio fueron 206; condiciones de trabajo 123; firma y cumplimiento de contratos colectivos 43, y luchas contra los despidos 9.

Un ejemplo que tuvo un desenlace trágico fue la acción emprendida por unos desempleados del Edo. Anzoátegui, el 17.07.03, al obstaculizar el tránsito por la au-

20. Ver capítulo Derecho a la Manifestación Pacífica de este mismo Informe y el mismo capítulo en los 14 informes anuales previos.

21. Base de datos de Provea.

topista Rómulo Betancourt en demanda de apertura de fuentes de trabajo. Funcionarios de la Guardia Nacional reprimieron la protesta y dispararon contra Juan Rafael OSORIO, de 26 años, quien murió producto de las heridas causadas por FAL²².

Otros ejemplos de protestas para exigir DESC, muestran el clima de intensa confrontación política y polarización, que desdibuja los límites entre la exigibilidad de estos derechos y los de naturaleza civil y política. Como ya señaláramos arriba, el 01.10.02 se inició un paro de agentes de la PM que tuvo como demanda explícita el pago de las deudas laborales a los policías, que incluían aumento salarial, fideicomiso y cesta ticket, y dotación de equipos de trabajo. El 07.10.02, sin embargo, 500 policías radicalizaron su acción al declararse en huelga de hambre, denunciando al alcalde Peña por la politización del cuerpo y solicitando las renuncias del director y subdirector. El 10.10.02 un grupo de estos funcionarios en conflicto en la Comandancia General de Cotiza, secuestraron 30 vehículos de la Dirección de Orden Público, entre estos 2 ballenas, para impedir que 100 funcionarios de la Brigada de Orden Público salieran a custodiar la marcha de la oposición. Los tomistas cerraron la puerta con cadenas y candados. El 12.11.02, todavía sin solucionarse el conflicto, se produce un enfrentamiento entre funcionarios de la PM apoyados por sectores afectos al Gobierno del Presidente Chávez, y varias comisiones de la PM pertenecientes a la Dirección de Orden Público leales al alcalde Peña. La acción de estos agentes produjo la muerte de tres personas, Edwin Manuel FLORES, de 23 años, y Jorge Luis ARIZA, de 41 años, Walter

Chávez; 13 lesionados por armas de fuego, además de no menos de 50 asfixiados.

En el Informe pasado ya pusimos de relieve cómo movilizaciones explícitamente motivadas por razones vinculadas a los derechos laborales emprendidas por trabajadores, empleados y ejecutivos de PDVSA tenían una inocultable motivación política²³. Para este Informe preferimos contabilizar las acciones de protesta de estos actores, sobre todo las ocurridas durante el paro de diciembre y enero, como acciones colectivas motivadas directamente por razones políticas. Desde la segunda semana del paro, Gente del Petróleo, la organización que actuó como principal vocero de los gerentes, empleados y trabajadores petroleros en paro, públicamente anunció que el paro se levantaría cuando saliera Chávez de la Presidencia y renunciaran el Ministro de Energía y Minas y el Presidente de PDVSA²⁴.

Las demandas vinculadas con el derecho a la educación ocuparon el segundo lugar en relación con las demandas motivadas por DESC, incluyendo entre ellas el derecho al estudio, mejor dotación, reparación o ampliación de planta física, cupos, becas, reformas educativas, nombramiento o destitución de autoridades educativas, contra el cierre de locales o por la construcción de nuevos, por autonomía, etc. En el período correspondiente a este Informe se efectuaron 141, el 18,7% de todas las agrupadas en el rubro de los DESC y el 9,1% del total general. Especialmente relevante en este período fueron las acciones de protesta organizadas por diversas asociaciones de padres y representantes, que durante las semanas del paro cívico nacional

22. El Universal, 18.07.03, pág. 2-28.

23. Ver Provea: Informe anual octubre 2001 – septiembre 2002. Op. cit. Pág.500.

24. Últimas Noticias, 12.12.02, s/n.

convocado por la CD exigieron la apertura de escuelas públicas y privadas cuyos docentes se habían sumado al paro. Provea registró al menos 9 protestas motivadas por el cercenamiento de este derecho.

Las demandas asociadas con el derecho a la vivienda se ubicaron en tercer lugar con 104. Entre estas demandas se incluye todo lo relacionado con la dotación de servicios públicos, vialidad, invasiones y desalojos en zonas urbanas, finalización de obras de infraestructura, calidad de la vivienda y derecho a la propiedad²⁵. Esta cifra representa el 13,8% de todas las agrupadas en los DESC y el 6,7% del total de acciones realizadas.

En este período se registraron 43 protestas por el derecho a la salud. Especialmente relevantes fueron las protestas motivadas por la falta de dotación de insumos en diferentes centros asistenciales del país, un problema que se agudizaría dramáticamente con el paro cívico nacional. El 10.02.03, luego de que un paciente del Hospital Pérez Carreño intentara quemar las instalaciones de ese centro, debido a que le negaron atención por falta de insumos, los médicos residentes y adjuntos cerraron el paso de vehículos por una de las vías de acceso al centro asistencial, para exigir al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) que se refuerce la seguridad y que solucione las carencias de insumos.

Se contabilizaron 41 acciones de protesta por servicios diversos distintos al de salud y 32 otras acciones específicamente motivadas por deficiencias en el servicio de agua.

Las protestas referidas al pasaje del transporte público fueron 24 y durante el paro se produjeron 20 acciones protestando por el suministro de la gasolina.

Las acciones colectivas restantes estuvieron motivadas por problemas variados como ambientales, o incumplimiento de ofrecimientos o de tierras.

Exigibilidad de derechos civiles y políticos

Como ya señalamos, a lo largo de este período las protestas motivadas por DCP aumentaron sustancialmente. Pero además, en las movilizaciones más estrictamente políticas la capacidad de convocatoria y movilización, y la expresión de recursos organizativos y materiales de los actores promotores, le dio a este tipo de acciones no solo un incremento en su importancia numérica, sino también una visibilidad de primer orden. En este período, igual que en el anterior, fueron las protestas políticas, incluidas aquellas a favor o en contra del Presidente Chávez, las más numerosas. Se registraron 382 acciones catalogables como motivadas estrictamente por razones políticas. Esto representa el 54,3% de todas las acciones motivadas por DCP y el 24,8% de todas las movilizaciones del período. De estas movilizaciones, 134 fueron en contra del gobierno y 50 a favor. Sin embargo, repitiendo lo que ya dijimos en el Informe anterior, la alta polarización que ha caracterizado el clima político y, dentro de ella, el comportamiento sesgado de la mayoría de los medios de comunicación a favor de la oposición, puede haber introducido distorsiones en el registro numérico y con seguridad lo ha hecho en la caracterización cualitativa de estas movilizaciones.

El 03.11.02, grupos de oposición realizaron una marcha para entregar al CNE las firmas recogidas las semanas previas para solicitar un referéndum consultivo sobre la per-

25. Para mayor información sobre este tema, ver capítulo Derecho a la Vivienda en este mismo Informe.

manencia del jefe del Estado en el poder. Esa marcha, que partió de la Plaza Francia de Altamira -tomada esta por militares disidentes- culminó en enfrentamientos entre opositores y afectos al Gobierno con un saldo de más de 20 personas heridas de bala y decenas golpeadas y asfixiadas por la inhalación de gases lacrimógenos²⁶. El 02.02.03, la CD convocó a otra jornada de recolección de firmas, “El Firmazo”, para solicitar en esta oportunidad, entre otras demandas, el referéndum revocatorio para el Presidente Chávez. Esas firmas fueron entregadas al CNE en agosto y rechazadas por esta instancia por haber sido recogidas extemporáneamente.

El paro cívico nacional iniciado el 02.12.02, que fue declarado indefinido el 09.12.02, estuvo acompañado de múltiples acciones diarias por parte de sectores opuestos al gobierno. La Plaza Francia en Altamira (Caracas) se convirtió en el “territorio” de la oposición y fue lugar de espectáculos, charlas, asambleas, concentraciones, vigiliadas y punto de partida de marchas y “trancazos” en la Autopista Francisco Fajardo²⁷. Entre el 23 y 26.12.02, por ejemplo, el movimiento de oposición liderado por la CD, presionando por la salida del Presidente, convocó entre otras acciones de protesta una “marcha de las antorchas” que se realizó el 23.12.02 finalizando en la “Plaza de la Meritocracia” en Chuao; el 24.12.02 realizaron una misa en el Parque del Este y en la noche una cena en la Plaza Francia de Altamira²⁸. El 16.02.03, opositores al gobierno

realizaron una misa en la Autopista del Este, para pedir por la “libertad del país”. Desde cuatro puntos del Área Metropolitana marcharon los participantes de una jornada que fue organizada por la Gobernación del Edo. Miranda y la Alcaldía de Baruta. Agua bendita fue rociada sobre los asistentes con manguera desde un camión cisterna²⁹.

También desde los inicios mismos de la paralización de la industria petrolera y en respuesta al llamado del Presidente de PDVSA a defender la industria, grupos diversos afectos al Gobierno en distintas regiones del país se movilizaron para minimizar los efectos del paro y restablecer la actividad. El 10.12.02, en el Edo. Falcón, grupos de oficialistas liderizados por el Alcalde de Coro, Rafael Pineda, del MVR, tomaron la refinería de Amuay. Emeverristas se desplazaron desde Maracay, Valencia, Maracaibo y Caracas para intentar detener el “sabotaje” que grupos opositores al gobierno promovían en contra de la industria petrolera³⁰. Situaciones como esta se repitieron a lo largo del paro. El 09.01.03, por ejemplo, la prensa registró 6 acciones distintas en diversas regiones del país, Barinas, Bolívar, Miranda y Zulia, con la misma motivación de instar a los empleados de PDVSA en paro a retornar a sus faenas³¹.

En este período las protestas en contra de la inseguridad ciudadana ocuparon el segundo lugar entre las motivadas por DCP. Se realizaron 66 acciones, lo que representa el 9,4% de las protestas por DCP y el 4,3% del total.

26. El Nacional, 04.11.02, pág. D-Últ.

27. MEDINA, Medófilo y Margarita LÓPEZ MAYA: *Venezuela: confrontación social y polarización política*, Ediciones Aurora, Bogotá, 2003. Pág. 175.

28. Últimas Noticias, 26.12.02, pág. 8.

29. El Universal, 17.02.03, pág. 1-4.

30. Así es la Noticia, 11.12.02, pág. 8.

31. Últimas Noticias, 10.01.03, pág. 8.

De ellas, 31 fueron protagonizadas por transportistas y taxistas, y 17 por habitantes de diversas zonas. La mayoría de estas acciones se realizaron después de haberse producido algún atraco o asesinato a manos del hampa común. Un caso representativo fue el protagonizado por más de 200 choferes de las rutas troncales del Municipio Sucre (Caracas) que paralizaron sus actividades en protesta por la muerte de un conductor, quien fue asaltado cuando laboraba en el Barrio Caucagüita. Fue promovida por los compañeros de Robert Caldera, un conductor de 21 años de edad, quien trabajaba para la línea Conductores Negro Primero, quien sufrió un infarto luego de ser atacado a tiros por la banda que lo asaltó. Por su parte, los conductores de la línea Catia-Tacagua, el 01.11.02, cerraron la autopista Caracas-La Guaira, en protesta por el asesinato de Francisco Farrías de 47 años de edad, luego de que fuera víctima de unos atracadores que constantemente operan en la zona guaireña. En el mismo hecho sangriento otros tres choferes resultaron heridos. El 01.04.03, numerosos transportistas pertenecientes a las principales asociaciones de la ciudad realizaron una caravana contra la inseguridad. La manifestación iniciada en horas de la mañana se prolongó hasta la tarde. Directivos de las líneas de transporte denunciaron que son víctimas de al menos 30 asaltos diarios en toda la ciudad, y que en lo que iba de año, aproximadamente 20 conductores habían resultado heridos como consecuencia de las acciones del hampa.

Dado el protagonismo de la política y la confrontación entre sectores, en este período las protestas motivadas por el derecho a la justicia, por el incremento de movili-

zaciones motivadas por la política y la seguridad, retrocedieron al tercer lugar, luego de ocupar el segundo en el período anterior y el primero en el previo³². Se realizaron en este período 57 acciones por este motivo, 5 más que el período anterior, representando el 8,1% de las protestas por DCP y el 3,7% del total. De estas, 20 protestas fueron protagonizadas por reclusos o detenidos o sus familiares, recurriendo con frecuencia a la huelga de hambre y en protesta por los retardos procesales. Entre las movilizaciones por DCP le siguen en frecuencia las motivadas por el derecho a la libertad de expresión e información con 47, es decir, el 6,7% de las protestas por DCP y el 3% del total. Es de destacar que en este período también se manifiesta la polarización en las protestas por esta motivación: 22 de ellas fueron promovidas por sectores afectos al gobierno en contra del comportamiento de los medios privados de comunicación, y 21 por grupos de oposición en contra los discursos y acciones del gobierno en contra de los medios privados de comunicación. Las protestas en contra de la represión ocuparon la quinta posición por frecuencia. Se registraron 31 movilizaciones, el 4,4% de las protestas por DCP y el 2% del total. Siguen las protestas por maltratos, principalmente protagonizadas por reclusos: 19 de 24. Las acciones de protesta de los reclusos y detenidos son frecuentemente dramáticas. El 11.03.03, reclusos de la cárcel de Carúpano (Edo. Monagas) iniciaron una “huelga de sangre”, consistente en infringirse heridas con objetos cortantes en demanda de mejoras en la calidad de la alimentación que les proporcionan. Habían mantenido una huelga de hambre y decidie-

32. Ver Provea: Informe anual octubre 2001 – septiembre 2002. Op. cit. Pág.504.

ron radicalizar las acciones de protesta en virtud de que no habían sido atendidas sus peticiones³³.

A las anteriores le siguen 16 movilizaciones en contra de la violencia y/o a favor de la paz. Las 79 movilizaciones restantes contabilizadas fueron motivadas por razones diversas: reclamos a gobiernos municipales, móviles de índole internacional, principalmente protestas contra la invasión de EEUU a Irak, protestas por muertes, las movilizaciones por la “meritocracia” en PDVSA, agresiones, allanamientos, etc. Las movilizaciones por estas otras motivaciones agrupables entre los DCP representaron en conjunto el 11,2% de las movilizaciones por estos derechos y el 5,1% de todas las del período.

Organizaciones asociativas

El intenso proceso de movilización política iniciado desde comienzos del actual gobierno ha estado acompañado también durante este período por un intenso proceso de organización de diversos sectores de la sociedad para los propósitos más disímiles. El conjunto de cambios institucionales que se viene produciendo desde el proceso constituyente de 1999 y que ha continuado en los años siguientes, ha contribuido al impulso de la efervescencia organizativa y de participación ciudadana. Tal como lo afirmáramos en el Informe anterior, también durante este período la polarización y confrontación política continuó afectando la dinámica organizativa desplegada en la sociedad.

Las movilizaciones políticas realizadas a lo largo de período, concentradas principal-

mente en el primer semestre, como ya señalamos, tuvieron también expresión organizativa. Con la vocación de trascender los cacero-lazos cotidianos que acompañaron el paro iniciado en diciembre y apoyándose en el artículo 70 de la Constitución, vecinos de distintas urbanizaciones de Caracas y otras ciudades del país comenzaron a reunirse en “asambleas de ciudadanos”. El 27.12.02 se realizó la primera bajo ese nombre en Cumbres de Curumo y en días siguientes se propagó a otros vecindarios³⁴. Esta iniciativa, por ejemplo, fue consolidándose hasta llegar a constituir una junta directiva de la organización civil Asamblea de Ciudadanos, que ha elaborado propuestas y documentos, dentro de la Coordinadora Democrática, para la agenda de una “nueva Venezuela”³⁵. En organizaciones de este tipo se manifiesta la tensión entre sus características de organización social y sus nuevas características de organizaciones articuladas a partidos políticos. Como ya señaláramos en el Informe pasado³⁶, organizaciones sociales de larga trayectoria que se han definido a sí mismas como organizaciones no partidistas y para objetivos sociales específicos, como Queremos Elegir, Sinergia, Red de Veedores, Asamblea de Educación y tantas otras, han continuado estando involucradas y participando en coordinación con partidos. Algunas de ellas continúan formando parte de la llamada Coordinadora Democrática, principal instancia de coordinación política de los sectores opuestos al Gobierno. También se dieron experiencias de asambleas de ciudadanos o comunitarias entre quienes apoyan al Gobierno. El Municipio Libertador, por ejemplo,

33. El Universal, 12.03.03, pág. 2-24.

34. Tal Cual, 03.02.03, pág. 5.

35. El Mundo, 15.01.03, pág. 3.

36. Ver Provea: Informe anual octubre 2001 – septiembre 2002. Op. cit. Pág.507.

aprobó el 26.12.02 la ordenanza prevista en la ley de los consejos locales de planificación pública, que es una instancia contemplada en el artículo 182 de la CRBV. Un vocero de esas iniciativas señaló que por el clima de confrontación política de principios de año, la discusión en esas instancias se desplaza a los álgidos puntos de la confrontación: paro petrolero, el derecho a la educación, las opciones electorales, la desobediencia tributaria o el control de los medios de comunicación³⁷. Los Círculos Bolivarianos, con su variada acción social y diversidad de intereses, fueron también un recurso organizativo usado durante el paro iniciado en diciembre para movilizar el apoyo al Gobierno. En la muy intensa movilización en torno a las instalaciones de la industria petrolera de parte de los sectores opuestos al paro, los Círculos Bolivarianos jugaron un rol importante.

El movimiento cooperativo existe en Venezuela desde hace muchos años, pero durante esa gestión ha recibido un importante impulso que se ha traducido en un crecimiento notable. La economía social que forma parte del proyecto político y del discurso del actual Gobierno tiene en las cooperativas uno de sus pilares principales. En la Constitución se las menciona como una de las formas para “*la participación y el protagonismo del pueblo*” (art. 70). Entre las leyes aprobadas con el recurso de la Ley Habilitante del año 2001, fue aprobada la *Ley Especial de Asociaciones Cooperativas* mediante el Decreto N° 1.440³⁸. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Cooperativas, para el año 2001 en todo el país había 1.948 cooperativas. Para agosto de 2002 registramos

3.389³⁹. En diciembre ya sumaban 4.079 y para julio de 2003, la Superintendencia tiene contabilizadas 10.032. Según la misma fuente, el número de afiliados pasó de aproximadamente 260.000 en 2001 a 390.000 en 2002 y finalmente a 659.354 para el mes de julio de 2003. Cifras que muestran lo acelerado del crecimiento de este tipo de asociaciones. 34% de las cooperativas se dedican a la producción de bienes y la prestación de servicios, 31% a la producción agropecuaria, 23% a actividades de transporte, 6% son cooperativas de consumo, 4% de ahorro y préstamo y el 2% restante se ocupa de servicios sociales⁴⁰. El discurso oficial, especialmente del Presidente Chávez, no es suficiente para explicar esta eclosión. Diversos entes del sistema financiero público han sostenido financieramente su desarrollo. El Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), el Banco Industrial de Venezuela (BIV), el Fondo de Crédito Industrial (Foncrei), el Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines, (Fondafa), el Banco de Fomento Regional de los Andes, el Banco de la Mujer y el Banco del Pueblo Soberano son algunos de ellos. Pero además, el impulso a las cooperativas contó con la política de contrataciones directas desarrollada por el gobierno a través de instancias del ejecutivo nacional y empresas públicas. El gobierno creó una Comisión Presidencial para Compras Gubernamentales que organizó múltiples ruedas de negocios para contratar con cooperativas y pequeñas y medianas industrias. Uniformes para escolares y preparación de almuerzos y meriendas para alumnos de las Escuelas Bolivarianas son contratados a estas asociaciones por el Ministerio

37. Últimas Noticias, 27.01.03, pág. 8.

38. Gaceta Oficial N° 37.285 de fecha 18.09.01.

39. Ver Provea: *Informe anual octubre 2001 – septiembre 2002*. Op. cit. Pág. 505.

40. Superintendencia Nacional de Cooperativas [en línea] <<http://www.sunacoop.gov.ve>> 14.11.03.

de Educación, Cultura y Deportes. Gobiernos regionales y locales contratan cooperativas para el mantenimiento de áreas verdes. Luego del paro petrolero, PDVSA desplegó amplia actividad en este campo. El 11.06.03, por ejemplo, en el llenadero de Yagua, Edo. Carabobo, directivos de la empresa entregaron 20 gandolas y otros accesorios valorados en 543 millones de bolívares a 7 cooperativas que se dedicarán al transporte de combustibles y lubricantes⁴¹.

En relación con el crecimiento del cooperativismo, cabe alertar, sin embargo, que se han conocido denuncias de empresas que se presentan como cooperativas para acceder a contratos con el Estado. Sin que sea posible, por ausencia de información sistematizada al respecto, conocer la situación real de este fenómeno, es conveniente que el Estado las tome en cuenta para adoptar medidas que impidan que se desvirtúe el espíritu de las políticas de estímulo a la economía social. Por otra parte, la efectividad de una política de estímulo al cooperativismo tendrá que evaluarse, en atención a la permanencia en el tiempo de las nuevas cooperativas.

Las organizaciones de mujeres tampoco han escapado a la aguda polarización política que aqueja al país pero, como ya señalamos en el Informe anterior, por su propia historia y no sin conflictos, han logrado mantener niveles mínimos de unidad y coordinación para impulsar una agenda común. La unidad de

todas las organizaciones de mujeres en el rechazo a la iniciativa de la Fiscalía General de la República de solicitar la derogatoria, por inconstitucional, de varios artículos de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia, ha sido una clara muestra de esto.

Alrededor de las tierras urbanas, y por el derecho a la vivienda, también se han vivido experiencias organizativas. En las barriadas de las ciudades sus habitantes se organizan en Comité de Tierras Urbanas que realizan un catastro del barrio para con ello aspirar a recibir los títulos de propiedad de las tierras que ocupan, en forma individual o colectiva, mediante la aplicación del decreto gubernamental promulgado el 30.03.02. Con la regularización de la propiedad, se inicia un proceso que tiene por finalidad rehabilitar a los barrios mediante la mejora de las viviendas y la adecuada prestación de servicios.

También con programas para el reparto de tierras rurales se ha incentivado la organización de campesinos. Ya mencionamos que el 31% de las cooperativas se dedican a la producción agropecuaria. Pero es también en esta área donde la conflictividad y violencia han tenido una de las mayores expresiones⁴². Mientras el Instituto Nacional de Tierras (INTI), adjudica títulos sobre tierras que considera públicas, distintas organizaciones de productores agrícolas y ganaderos denuncian que dichas tierras son de propiedad privada.

41. Últimas Noticias, 15.06.03, pág. 16.

42. Para un desarrollo más acabado sobre este tema ver capítulo Derecho a la Tierra en este mismo informe.

El paro petrolero

El lunes 02.12.02 se inició el cuarto “*paro cívico nacional*” convocado por fuerzas de la oposición al gobierno de Chávez en el lapso de un año. Inicialmente con el mismo se buscaba, según sus impulsores, presionar para adelantar una salida electoral a la crisis. En los primeros momentos el paro pareció alcanzar un éxito, cuando más, discreto. Centros comerciales, franquicias de comida rápida, establecimientos comerciales ubicados en el Este de la ciudad de Caracas y en los vecindarios de clase media alta de las principales ciudades, y una fracción importante de las grandes industrias del sector privado del país, acogieron el llamado al paro. Sectores privados de la educación también. Sin embargo, en los dos primeros días estuvo lejos de tener una contundencia que pusiera en jaque al gobierno. El transporte público no se plegó. El comercio minorista, sobre todo en el Centro y Oeste de Caracas, y en el interior del país, siguió activo. La mayoría de la pequeña y mediana industria continuó con sus labores habituales. El complejo industrial de Guayana mayoritariamente desoyó la convocatoria. El comercio informal, la buhonería, siendo tradicionalmente el mes de diciembre el de su mayor actividad, llenó como nunca la ciudad de Caracas.

Pero para la percepción de la mayoría de los venezolanos, el miércoles 04.12.02 eso cambió sustancialmente. Los medios televisivos difundieron la paralización, en apoyo al paro cívico, del tanquero Pilín León en pleno canal de navegación del Lago de Maracaibo, permaneciendo fondeado y en manos de la tripulación “rebelde” hasta el sábado 21. Similar actitud asumieron los capitanes y tripulaciones de los restantes buques de la flota de PDV Marina en el mismo lago, en las costas de Falcón, frente al puerto de Carenero, en Catia La Mar y en el Oriente del

país. Los tanqueros fondeados no solo dejaron de realizar las tareas de transporte de crudos y refinados, sino que parcialmente bloquearon importantes puertos del país. Esta acción evidenció el grado de compromiso que un buen número del personal de la industria petrolera tenía con el paro cívico. Desde entonces, el centro medular del conflicto de diciembre y enero, al igual que lo fue en el mes de abril de 2002, días antes del golpe de Estado, estuvo centrado en el paro petrolero. El 06.12.02 el presidente de PDVSA, Alí Rodríguez Araque, anunció que se había visto obligado a llamar a los clientes internacionales para anunciarles la declaratoria de “estado de fuerza mayor”, pues eran posibles retrasos e incumplimientos¹. Ese mismo día ocurrieron los trágicos acontecimientos de la plaza Francia de Altamira (Caracas), en los que una persona con desequilibrios mentales asesinó a tres activistas de la oposición. Fue el lunes siguiente, el 09.12.02, cuando en cadena de las televisoras privadas los líderes de la oposición, en voz del presidente de la CTV Carlos Ortega, anunciaron que el paro pasaba a ser “*indefinido*” y que sería suspendido cuando “*el presidente renuncie*”.

El Paro, tal como se analiza en el capítulo Derechos Laborales, y en el Contexto de este Informe, no cumplió con los extremos legales contemplados para ejercer el derecho a huelga; sus líderes no garantizaron los servicios mínimos esenciales y, en repetidas ocasiones instaron a la Fuerza Armada Nacional (FAN) a intervenir en el conflicto, todo lo cual fue cuestionado por el movimiento de derechos humanos en su momento.

Para la primera semana de febrero de 2003, con la realización del llamado “firmazo”, los sectores no petroleros que todavía permanecían en paro levantaron su acción. Todos los centros

comerciales reabrieron sus puertas, las franquicias volvieron a atender a su público, la totalidad de los planteles educativos retornaron a su normal actividad. En el sector petrolero la recuperación plena de actividades fue más compleja. Con el despido de los empleados y trabajadores comprometidos en el paro, una reestructuración de PDVSA sobre la marcha, la contratación de nuevo personal y el apoyo de las FAN y sectores de la población movilizados, el gobierno logró, primero, restablecer los niveles normales de producción de crudos, más tarde recuperar la capacidad de refinación y, por último, normalizar el flujo comercial internacional de la industria. Para principios del mes de febrero ya fue claro que el “paro cívico” no había alcanzado ninguna de sus metas, ni las inicialmente declaradas -el adelanto de elecciones- ni las explicitadas en los momen-

tos de mayor fuerza de esa movilización -el derrocamiento del presidente-.

El paro petrolero tuvo un altísimo costo. De más de 2.500.000 de barriles diarios (b/d) que se estaban produciendo en el mes de noviembre, en diciembre se produjo en promedio 707.000 b/d, llegando durante la última semana a cifras menores a los 300.000. El promedio de enero fue de 738.000 b/d, durante febrero 1.865.000 b/d y para marzo ya se habían recuperado niveles normales de producción. Mucho se ha especulado sobre la cuantía de las pérdidas. En marzo, para citar una fuente confiable, la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional presentó un informe sobre el impacto del paro en la economía y el fisco. De acuerdo con sus estimaciones, el costo del paro fue de unos 7.367,18 millones de dólares, es decir, un monto equivalente a 7,59% del PIB².

1. Últimas Noticias, 07.12.02.
2. OAEF Asamblea Nacional, Impacto de la Huelga General sobre las Perspectivas Económicas y Fiscales para 2003 en Venezuela, Marzo 2003, Serie IA 0303-054.